

Negociación con las FARC-EP en el contexto de la política de paz

Negotiations with the FARC -EP in the context of peace policy

COLCIENCIAS TIPO 2. ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

RECIBIDO: AGOSTO 23, 2015; ACEPTADO: SEPTIEMBRE 24, 2015

Mg. Carlos Alberto Osorio Calvo
carlos.osorio05@usc.edu.co

Universidad del Valle, Cali-Colombia

Resumen

El artículo indaga sobre la manera en que el conflicto armado condiciona el aporte a la democracia por parte de sectores de la sociedad civil ligados a los movimientos sociales. Al referirse al origen del conflicto armado y a la permanencia del mismo en el escenario nacional, señala las posibles dificultades que al accionar político de los movimientos sociales le surgen en un escenario tan complejo como el colombiano. Se ofrece una mirada, a partir de la consulta de fuentes documentales, de las causas del conflicto armado, los principales actores y las diversas estrategias de paz intentadas en los gobiernos, desde 1978 y hasta 2010. De esa mirada documental se derivan algunos balances, a la luz de los cuales se considera el actual proceso de negociación adelantado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba.

Palabras Clave

Democracia; paz; conflicto armado; política; sociedad civil; proceso de paz.

Abstract

In this study we investigated the way in which armed conflict affects the contribution to democracy by sectors of civil society linked to social movements. The article, referring to the origin of the armed conflict and the permanence of the same on the national stage, said the possible difficulties that the political actions of the social movements will arise in such a complex scenario like Colombia. This article offers a look, after consultation of documentary sources, the causes of armed conflict, the main actors and the various peace strategies attempted in government from 1978 to 2010. From this documentary look derive some balances in light of which is considered the current negotiation process between the government ahead of Colombia and the FARC in Havana, Cuba.

Keywords

Democracy; peace; armed conflict; politics; civil society; peacebuilding.

Este artículo surge del proceso de investigación desarrollado por el autor en la Universidad del Valle, como parte de la preparación de la tesis realizada para optar por el título de Magister en Sociología, en dicha universidad.

I. INTRODUCCIÓN

El actual proceso de negociación que realiza el gobierno con la guerrilla de las FARC despierta expectativas y genera toda suerte de sinsabores en diversos sectores. Desde la agenda misma hasta los discursos de los negociadores de parte y parte, pasando por el tema de los actores llamados a la mesa de conversación, son motivo de cábalas, lecturas, esperanzas y desconfianzas. El presente del mismo está determinado por la negociación en medio de la confrontación armada y por el necesario trámite de un marco jurídico que sin impunidad logre la desmovilización de los miembros de la guerrilla de las FARC. . El futuro inmediato de este proceso está también ligado a la inclusión de la Guerrilla del ELN y del reducto del EPL en un proceso de negociación que conduzca a la efectiva desmovilización de dichos grupos y la inclusión en el tratamiento jurídico de los crímenes no solo cometidos por las guerrillas sino también por los diversos actores ligados al conflicto. Este artículo pretende mirar lo que se está dando en el actual proceso de negociación a la luz de algunos de los principales aciertos y desaciertos de la política de paz de los últimos gobiernos y en el contexto mismo de la historia de este conflicto armado. Esto en tanto la experiencia de dialogar en medio de la confrontación no es nueva en el país, como no lo es la existencia de sectores sociales que apelan a la guerra y a la derrota militar del contendor como única salida al conflicto armado en Colombia.

La guerrilla con la que el actual gobierno está dialogando no es la misma con la que han intentado dialogar otros gobiernos. Tampoco es igual la situación del gobierno en términos de correlación de fuerzas a la que han experimentado otros gobiernos frente al conflicto armado. El escenario nacional y el escenario mundial han cambiado mucho a lo largo de las décadas de esta guerra interna. Por ello, en este artículo se ofrece también una caracterización de las transformaciones de la guerrilla de las FARC, del conflicto y de la política de paz, que como lo plantea Germán Ayala Osorio (2013), ha sido y es, sobre todo, un asunto de gobiernos más que una política de Estado como si lo es la guerra. La pretensión es rastrear en la lectura de estas transformaciones algunas pistas frente al actual proceso de diálogo entre gobierno y guerrilla, y eventuales desafíos en lo que sería un escenario de post-acuerdo con las FARC.

Este trabajo parte de la constatación de que vale la pena también interrogarse por el papel de los diversos sectores

sociales del país en el actual proceso de paz, atendiendo a esa mirada de la historia de este conflicto, esto justamente porque a lo largo de esta historia el proceso de la violencia logró permear casi al grueso de la sociedad, mientras que en los diversos escenarios construidos para la negociación y en el marco de las políticas de paz, el papel de los sectores sociales también ha sido diverso, manteniendo, sin embargo, la constante de que la sociedad nunca ha sido la principal protagonista del tema de la paz y de las negociaciones que se han planteado, aunque haya sido siempre la principal víctima de la guerra.

Para este trabajo se aporta un diálogo a partir de la revisión documental entre los procesos de paz intentados por los gobiernos a partir de 1978 y hasta 2010 y el actual proceso de negociación. Se hace de manera inicial una mirada del conflicto armado, sus orígenes, su evolución y sus actores y se presenta a manera de discusión algunas reflexiones que pretenden a partir de las experiencias derivadas de estos procesos de paz y en el marco de la política de paz, ofrecer algunas reflexiones críticas en relación con el actual proceso de diálogo y con la expectativa de paz construida alrededor del mismo.

II. LAS VIOLENCIAS Y LAS GUERRILLAS

La historia de las guerrillas en Colombia es compleja y diversa. El escenario de origen y permanencia de las mismas está muy ligado a las formas mismas en que el Estado ha construido su vínculo con los con la sociedad. Dos elementos resultan relevantes en la dinámica misma del conflicto armado en el país. Por un lado están las diversas formas de exclusión económica, social y política como combustible de la guerra. Por otro lado, pero en perfecta sintonía con lo anterior, está la existencia, validación y promoción de formas violentas de dar curso a la resolución de las diferencias. A estas dos realidades hay que sumarle la creciente incursión de la economía ligada a la ilegalidad tanto en la dinámica misma de los gobiernos como en la sociedad y en la guerra y sus actores.

Uno de los principales actores en el conflicto que vive Colombia es las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como movimiento político y como insurgencia armada. Esta insurgencia armada ha sido vista desde algunas perspectivas de análisis como el producto de la forma en que se conduce la política en el país, en particular desde la impronta de los partidos políticos, las élites vinculadas a ellos y sus lógicas clientelistas. Algunos análisis sostienen que la insurgencia armada se inscribe en

la lógica de conseguir por la fuerza la transformación de las estructuras sociales que consagran la exclusión política y económica. En Colombia en la década del 60, momento de instalación en el escenario político de la guerrilla de las FARC, era inevitable la aparición de la insurgencia armada. Y aunque en principio es una guerrilla pequeña con las características de un movimiento de autodefensa campesina, en el tránsito de la década del 70 al 80 su protagonismo y legitimidad política se fortalece por la postura represiva y militarista de la administración de Turbay a partir del 78. Esta guerrilla va a ser bien vista por algunos sectores que aprueban su oposición y combate a un gobierno mundialmente condenado por su desatención a los derechos humanos y que contribuye al deterioro de las condiciones internas del país, sumiéndolo en el vacío político (Pizarro, 1989, p. 254).

La violencia anti sistema que preconizan las guerrillas en el escenario de impugnación del gobierno represivo que sostiene la exclusión política, económica y social, se inscribe en el contexto espacial y temporal de las secuelas que la violencia entre liberales y conservadores deja en el país. Es incluso en las zonas donde ha sido fuerte esta confrontación en donde la violencia guerrillera va a encontrar condiciones para desarrollarse. Pizarro dirá que estas condiciones sociales hacen que segmentos de la población sean susceptibles a encontrar en la guerrilla una opción política. De igual manera el abandono del Estado de zonas del país o su presencia puramente represiva en ellas va a permitir que las guerrillas se consoliden. También la crisis de la izquierda legal y su poca capacidad de interlocución entre el Estado y la sociedad colocan a la insurgencia armada como una alternativa para quienes, con ideas radicales, pretenden un cambio en el orden social (Pizarro, 1989, p. 253)

En el origen mismo de las FARC está su reivindicación de canales políticos y su rechazo tanto a la exclusión como a la persecución estatal y a la validación del uso de la violencia institucionalizada como forma de eliminación del contradictor. La recepción de la población hacia las insurgencias en principio se relaciona con la débil presencia del Estado en el territorio nacional y la carencia de referentes de articulación de la sociedad civil en torno al Estado y la institucionalidad que lo representa. Daniel Pécaut analiza el fenómeno de la violencia en Colombia relacionándolo con el conjunto de la dinámica política de la nación. Va a sostener que en Colombia a pesar de existir la apariencia de una relativa estabilidad en materia política, la

democracia no es ni suficientemente sólida ni suficientemente vinculante. Colombia carece además de unos acontecimientos cohesionadores en torno a los cuales se genere movilización popular. A cambio de esto se han institucionalizado formas de negociación y acuerdo entre los intereses y las fuerzas políticas que terminan por suplantarse los consensos y la cohesión (Pécaut, 2003, p. 18).

No existen en el país elementos simbólicos que generen adhesión, vínculos, en torno a la idea de Estado y nación. Los elementos de cohesión de los ciudadanos en relación con el Estado son muy precarios y pasan por la mediación de los partidos y su lógica clientelista. No hay vínculo en torno a la idea de Estado de derecho. El ciudadano no se siente con derecho a reclamar su participación y el respeto de la integridad de su condición de ciudadano. Lo que existe es una relación de favor y clientela, entre el ciudadano y los bienes y necesidades. Los derechos se burlan. Las elecciones, escenario al que se reduce la participación, se arreglan en sintonía con las lógicas de poder y favores en que se mueven las regiones y los partidos. La ciudadanía queda despojada de su contenido y se negocia en el contexto de relaciones desiguales determinadas por el clientelismo (Pécaut, 2003, p. 97-98).

La movilización social y la existencia de una sociedad civil sólida y activa se ven desdibujadas en esta dinámica. Los partidos se presentan como los únicos canales de demanda y la represión es la forma institucionalizada de contención de los intentos de reclamo por fuera de estos canales. Colombia, en el contexto del continente, es el único país que no conoce movilizaciones de carácter nacional que vinculen en torno a imaginarios comunes de ciudadanía y derecho (Pécaut, 2003, p. 97-99). Hay entonces aquí un factor condicionante del recurso a las armas y a la ilegalidad como canal político. La exclusión política en un escenario tan precario de identificación y cohesión de la población y al lado de la exclusión económica ofrece un caldo de cultivo para fermentar la vía de la confrontación armada y una cierta confluencia de las necesidades de la población con las demandas de la insurgencia. Leídas estas realidades en el contexto latinoamericano de posicionamiento de la izquierda política y en la lucha anticomunista en la que se inscribe la política de seguridad estatal, el conflicto colombiano se va posicionando en el campo de confrontación político e ideológico propio de la guerra fría.

Es determinante en la instalación y el avance del conflicto armado el tipo de presencia del Estado en el

territorio colombiano. Ya se ha insinuado que en el país hay zonas de desafiliación social que generan formas de afiliación en torno a los grupos armados. El proceso de migración y colonización genera espacios geográficos, distantes de los centros políticos en los que las autoridades ejercen control y la institucionalidad estatal presencia. Estas zonas de colonización empujadas por la misma guerra demandan unas formas de dirimir conflictos, al carecer de mediaciones institucionales. Muchas de estas zonas de migración son, además, las que se han orientado hacia la economía ligada a la producción de sustancias de uso ilícito y a otras formas de economía ilegal (Pécaut, 2003, p. 21)

Ya se ha mencionado que hay en Colombia una tradición de legitimación de formas ilegales de tramitar los conflictos y las necesidades, que termina por legitimar la violencia. La violencia ha sido en el país un recurso frecuentemente utilizado en los conflictos políticos, agrarios y laborales entre otros. La violencia entre liberales y conservadores se intenta conjurar con la instalación del Frente Nacional, haciendo de este el resultado final de la confrontación violenta y generando la idea de que el uso de la violencia puede conducir a obtener fines políticos. El Frente Nacional se torna así en un pacto de repartición entre los actores de la guerra. Con el Frente Nacional viene el reparto clientelista de la burocracia y los recursos haciendo de la transacción clientelista el modelo político que termina por suplir la presencia del Estado (Pécaut, 2003, p. 100).

En Colombia ha hecho carrera la aceptación de prácticas ilegales para determinar las correlaciones de poder. Un ejemplo de ello es la compra de las elecciones o la amenaza a los votantes. Los actores armados y los sectores de poder ligados a los mismos han instituido mecanismos para influir en la conformación de los escenarios de gobierno desde la compra o la presión sobre el electorado. El recurso a la violencia se da en el contexto de la validación de esta lógica de las transacciones (Pécaut, 2003, p. 102). Esta realidad política en la que el ciudadano se queda sin elementos simbólicos de cohesión en torno a la ciudadanía y el Estado, en medio de una ausencia del Estado y del derecho, en donde se valida toda suerte de transacciones en condiciones de desigualdad, en donde el poder se negocia, se compra y se vende y se impone por la fuerza, el recurso a la violencia aparece, según Pécaut, como el único que actores desiguales pueden usar por igual (Pécaut, 2003, p. 102).

El recurso a la violencia se extiende en el tiempo y parece ir desdibujando el sentido de pertenencia a la sociedad. La violencia aparece como inscrita en el orden mismo de las cosas en el país. Sin embargo la comprensión de la población sobre la misma parece transitar por variaciones de interpretación. En el periodo de la primera violencia esta podía leerse perfectamente bajo la relación amigo – enemigo. En las fases recientes de la violencia esa relación es cada vez menos evidente y cada vez es más frecuente el tener que construir tal relación. (Pécaut, 2003, p. 18). En el contexto internacional, tras la llamada caída del llamado socialismo real y con las consecuentes transformaciones en el orden mundial a partir de la caída del muro de Berlín, las guerrillas colombianas se han ido transformando. Ya se mencionó que las guerrillas surgen como autodefensas campesinas que se van llenando de un discurso anti-sistema en la medida en que confrontan un estado de cosas que genera exclusión y persecución violenta de la diferencia.

En el desarrollo de las guerrillas se va dando el paulatino encuentro y penetración del marxismo. Las FARC van a ser, en sus inicios, una organización militar ligada al partido comunista. El discurso marxista, con el paso del tiempo, se torna para ellas más que en su norte político, en una clave de análisis de la realidad. En el complejo escenario político colombiano sus discursos se van nutriendo de relatos nacionalistas, antiglobalización y populistas. El acceso a la economía de la ilegalidad y el control de la misma va a marcar no solo distanciamiento con los discursos políticos de origen sino con las prácticas. Una mayor capacidad económica fortaleció además la capacidad de las guerrillas de sostener en el tiempo una guerra y su presencia en el escenario nacional. De esta manera mientras en el mundo van desapareciendo los conflictos armados que oponen la confrontación de la izquierda política a los sectores hegemónicos de poder asociados con la derecha, en Colombia el conflicto armado muta por cuenta de la mutación de las guerrillas y por cuenta también no solo de la imposibilidad de los gobiernos de generar una salida negociada al conflicto, sino también por su apuesta a mantener una guerra en medio del sostenimiento del clientelismo, de la transacción desde la ilegalidad, de la eliminación violenta de la diferencia y del sostenimiento de formas de exclusión. A esto hay que sumarle la penetración del narcotráfico en la vida política de la nación para plantear que el conflicto histórico no solo no se acaba sino que termina transformándose hasta el punto de hacer cada vez más difícil su terminación.

El conflicto armado de las dos últimas décadas es, si no el mismo, si heredero de la violencia que se da entre 1947 y 1958. Ya se dijo que a partir de este acontecimiento en el país se comienzan a posicionar formas violentas de resolución de los conflictos y crecen, en virtud de los desplazamientos que con la violencia se generan, escenarios de marginalidad de la acción y la presencia estatal. Esta violencia del 50 se constituye en un escenario que sirve como crisol para las guerrillas. Allí se da el encuentro entre la última fase de la confrontación violenta entre liberales y conservadores y el surgimiento de movimientos insurgentes de inspiración marxista. En la década del 60 surgen nuevos grupos que se van a matricular ideológicamente en las diversas corrientes del marxismo, alternando su discurso con un populismo receptivo entre los campesinos, pero que van a conservar un eje político estratégico derivado de la experiencia de la violencia, lo que va a dar como resultado un comportamiento híbrido en estos grupos (Ortiz, 2006, p. 325). Las FARC es un ejemplo de esa dinámica híbrida.

III. FARC

El tipo de organización que históricamente ha configurado las FARC en lo político combina la ideología marxista leninista con la inclusión en su discurso nacionalista de los anhelos de sectores campesinos excluidos. En este sentido es una organización de defensa de lo campesino. En la práctica convergen en sus filas jóvenes de los sectores campesinos con obreros e intelectuales provenientes del sector sindical y universitario. La historia de las FARC es también la historia de la resistencia de sectores campesinos para enfrentar la amenaza que les viene del ingreso del capitalismo en el agro a través de la industrialización del mundo agrario y de la expropiación de tierras por cuenta de terratenientes. Para los campesinos las FARC es una forma de inserción e inclusión en el Estado. Las FARC han dotado de reivindicaciones políticas para empoderar mediante el uso de la fuerza a campesinos. Esta guerrilla logra suplantar por medio de la fuerza las organizaciones propias de estos sectores sociales (González, F., Bolívar, I., Vázquez, T., 2003, p. 58).

Las FARC es una organización de origen y arraigo campesino. Surgen de las autodefensas campesinas y de la resistencia organizada por las mismas en las llamadas repúblicas independientes en el sur del Tolima y en algunas poblaciones de Cundinamarca. Políticamente van a estar

influídos por el partido comunista en su más ortodoxa ala (Pécaut, 2003, p. 59-61). Ligada al campo y al partido comunista es en sus inicios es una guerrilla de partido que transita tras las huellas de los asentamientos y del accionar de las autodefensas campesinas en una lógica puramente defensiva determinada por su escasa capacidad militar y por una visión más puesta en el contenido político de las autodefensas campesinas que en el de tomarse el poder (González et al., 2003, p. 58)

Durante el Frente Nacional en varias ocasiones el gobierno va a tratar de eliminar las llamadas repúblicas independientes a través de bombardeos sobre las zonas en las que se encuentran. Esto obliga a las autodefensas a huir e internarse en el monte dando origen a la base sobre la cual se funda las FARC, desde el discurso en torno a que el Estado con sus ataques los obligó a la guerra, y desde el mito fundacional en torno a la resistencia al embate de la fuerza pública que va a alentar a los militantes de la organización y los va a cohesionar en torno a la figura de su líder Manuel Marulanda (Pécaut, 2003, p. 62).

En 1964 se reúne en Riochiquito (Tolima) la primera conferencia guerrillera que va a crear el bloque sur, confiriéndole una cierta autonomía en relación con el partido comunista (Pécaut, 2003, p. 65). Allí confluyen las autodefensas armadas del sur del Tolima junto con las de Huila, Cauca y Valle para lanzar una proclama nacional en la que se constituyen como FARC. En ella pregonan un programa de lucha a favor de una reforma agraria. En el programa agrario de las FARC señalan:

Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen (...) usando la vía menos dolorosa (...) la vía democrática de masas (...) Esta vía nos fue cerrada violentamente, y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugamos el papel histórico que nos corresponde (...) obligados por las circunstancias nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder (Marulanda et al., 1993).

En 1966 la segunda conferencia de la organización va a exaltar el valor de la lucha armada y guerrillera. Las FARC comienza su accionar con poco éxito y recibiendo golpes importantes por parte del ejército. Pese a lograr muy poca expansión en sus orígenes, su arraigo campesino les va a permitir sostenerse y la construcción de una mitología en

torno a Marulanda y a la resistencia a los ataques del ejército le va a conferir una cierta legitimidad entre las poblaciones en las que se van arraigando (Pécaut, 2003, p. 65-66). Parte de su capacidad de sostenerse en esas fases iniciales se debe al papel que jugaron en constituirse en avanzada y sostén de la colonización de algunas zonas del territorio nacional por parte de sectores campesinos.

Para la VII conferencia de la organización en 1982 se evidencia su voluntad de expansión. Se traza ya el objetivo de la toma del poder. Plantean la necesidad de crecer numéricamente lo mismo que multiplicar la cifra de unidades operativas. Entre esta definición y la llegada del presidente Andrés Pastrana al poder en 1998 las FARC van a crecer hasta el punto de contar con un estimado de 11.300 hombres (Ortiz, 2006, p. 330). Este crecimiento se da fruto del diagnóstico de la realidad que hace las FARC hacia finales de los 70 y comienzos de los 80, el cual le indica que en el país se está dando una situación pre revolucionaria derivada del auge en el descontento popular y en la movilización social. Se plantean que ahora más que nunca la lucha armada resulta prioritaria en el contexto de la combinación de todas las formas de lucha. Algunos acontecimientos que detonan este cambio de perspectiva son: 1. los ataques del ejército a lugares que han sido santuario de las FARC. 2. El bloque histórico de las FARC se reactiva militarmente ante esta ofensiva del ejército. 3. El estatuto de seguridad del gobierno del presidente Turbay que enfatiza en la represión contra toda forma de contestación y que hace que la guerrilla encuentre como única salida política la lucha armada. 4. La movilización popular de 1977 a la que las FARC atribuye un carácter insurreccional. Esta interpretación del momento histórico y la voluntad de expansión de la guerrilla para concretar la toma del poder hace que se privilegie lo militar sobre lo político, el ejército sobre el partido (González, 2003, p. 54).

Las FARC materializa esta idea de toma del poder y crecimiento numérico en la estrategia de *guerra móvil*. Esta estrategia le va a permitir operar con grupos de muchos hombres, atacar con ellos y ganar posiciones a la fuerza pública. Esta estrategia es posible gracias a la elevada inversión de recursos en la compra de armamento. Los resultados del poderío militar y estratégico de las FARC se verán en las cruentas tomas a bases militares del ejército y la policía de las cuales van a tomar retenidos a un gran número de soldados y policías. Estas tomas además permitieron aumentar el control de territorios en manos de

esta guerrilla. Van a lograr controlar grandes franjas del suroccidente del país y van a conformar un cerco en torno a Bogotá (Ortiz, 2006, p. 331).

A mediados de los 80 los planes de expansión coinciden con una propuesta de paz por parte del gobierno del presidente Betancur. Las FARC ponen en práctica una estrategia para capitalizar esta oportunidad política. Alcanzaron un alto al fuego y la posibilidad de materializar su participación política a través de la creación de la UP (Unión Patriótica), partido con el cual se presentan a las elecciones, como una coalición entre los insurgentes y el partido comunista. La idea de la Unión Patriótica es lanzada por las FARC en el marco de los diálogos de paz. Surge como un movimiento amplio y pluralista en el que puedan encontrarse diversos actores en torno a la búsqueda de la paz. La idea va a ser asumida por varios sectores, entre ellos el partido comunista. Es en el campo y entre sectores campesinos donde este movimiento va a encontrar bastante eco en virtud de que este sector no se siente representado en las formas tradicionales y clientelistas de ejercicio político en Colombia. La Unión Patriótica va a impulsar movilizaciones campesinas lo que indica que este sector encontró en la UP un canal para expresar sus reivindicaciones. En 1986 este partido logró triplicar la votación tradicional de la izquierda eligiendo 14 congresistas.

Paralela a esta participación en política la insurgencia continúa con sus prácticas violentas supeditando la acción política a la acción militar. Pese a que en 1986 la UP saca la mayor votación que hasta entonces cualquier sector de la izquierda había conseguido en el país, las FARC sin embargo, manteniendo la voluntad de la VII conferencia, continúan en la ofensiva militar lo que hace que se distancien cada vez más de lo político. Esta estrategia de combinación de formas de lucha y el terrorismo practicado por los narcoparamilitares en asocio con sectores del gobierno y las fuerzas militares va a hacer que fracase la iniciativa de coalición y participación electoral de la UP (Ortiz, 2006, p. 335-336). La coalición FARC - partido comunista termina por romperse y las redes de apoyo de las FARC terminan por quedar a merced de los ataques paramilitares. La UP es mortalmente golpeada por la guerra sucia de los paramilitares en alianza con sectores del poder. Las FARC terminan abandonando la UP y consagrando su independencia frente al partido comunista. La evaluación que las FARC hacen del periodo de tregua y concentración en la Uribe, Meta (Campamento en donde

se concentra el Secretariado de las FARC y los diálogos con el gobierno) es que el sedentarismo y la urbanización relajaron la disciplina militar. Se aprestan entonces a retomar el nomadismo propio de su fase de expansión (González, 2003, p. 57).

A partir de 1987 se vuelve a la movilidad como ejército y se ha tomado distancia ya del partido político. En 1993, en la VIII conferencia de la organización se consagra la independencia total frente al reducido aparato político mientras que se lanza un movimiento político que sea controlado totalmente por la estructura y la lógica militar y que no se ponga tan en evidencia y peligro. A partir de 1994 se asume una guerra de posiciones. La realidad de las FARC para entonces es la de una guerrilla con un alto poder de presión sobre la población, por la vía de las armas, pero sin poder de convocatoria a nivel nacional y entre los sectores urbanos (González, 2003, p. 60-61).

IV. LA ECONOMÍA DE LA COCA

Como ya se ha dicho, las FARC ideológicamente se construyen desde la relación con el partido comunista. Durante su evolución se presentan tensiones en esta relación. En principio es una guerrilla de partido que poco a poco va supeditando lo político a lo militar. La idea de la combinación de todas las formas de lucha va a quedar supeditada a la voluntad de crecimiento numérico y a la expansión de su fuerza ligada a la presencia de la economía de la ilegalidad. Es así como con el tiempo y el crecimiento van a compartir sus posturas ideológicas con una cada vez más frecuente inserción en la economía de la coca y la amapola, del control de recursos de transferencias gubernamentales y de la minería ilegal, flexibilizando para ello un poco su discurso político. La diversidad de origen de sus miembros hace que se de distancia entre su discurso y su práctica al igual que entre las líneas que se proponen desde las estructuras de dirección y las acciones puntuales de las bases. En concreto esta distancia se puede evidenciar en lo lejos que prácticas como el secuestro o la extorsión pueden tener en relación con el discurso marxista ortodoxo.

Esta mutación de las FARC coincide también con el ahogo que va teniendo el inicial impulso de las guerrillas entre los sectores rurales. Las FARC no experimentan de manera sostenida una confrontación real al régimen, más que en zonas periféricas. Si bien hay malestar social y de alguna manera logran encauzarlo, en su accionar no hay perspectiva de ruptura del régimen. (Pécaut, 2003, p. 74).

La amenaza al régimen que la guerrilla combate viene no particularmente de la asimilación de los discursos de la guerrilla por parte de la población o de la politización de la misma, sino de la inyección de dinero a la guerra y con ello de la transformación de la lógica de las organizaciones insurgentes.

Es la economía de la droga la que logra alterar la correlación de fuerzas de parte de las guerrillas y de parte del Estado. El ingreso en la economía ligada a la coca significa mayor poder militar de las organizaciones armadas y mayor corrupción en el gobierno. Comienza así otro periodo de las guerrillas en el que sus prioridades cambian. Ahora interesa aumentar los recursos financieros, tomar el control de centros de poder en relación con la producción de coca y vincularse con las redes internacionales de tráfico. En 1982 las FARC anuncian una nueva fase de su accionar que consiste en el desdoblamiento de frentes. Esto va a ser posible por la capacidad económica de la organización. Es allí cuando agregan a sus siglas las letras EP ejército del pueblo. Atrás quedan las autodefensas. Colombia entra en otra fase de la guerra (Pécaut, 2003, p. 75).

Las FARC y el ELN van a experimentar crecimiento en el número de sus efectivos y en sus zonas de presencia que se explica por el acceso a recursos económicos derivados del ingreso de estos grupos en la economía de la producción y comercialización de sustancias de uso ilícito. La posición de los grupos insurgentes frente a estas actividades va a evolucionar desde el rechazo inicial a esta actividad hasta el ingreso poco a poco en las diversas fases de la producción y comercio.

El proceso de descentralización administrativa impulsado por el gobierno terminó por ser otra fuente de recursos y de poder para las guerrillas ya que comenzaron a beneficiarse de los recursos para contratación manejados por las entidades territoriales, al igual que comenzaron a manejar algún caudal político en las regiones, lo que les permitió que contratos, puestos y los mismos cargos públicos quedasen en manos de gente favorable a ellos, o por lo menos de recomendados por ellos. El poder de influencia de las guerrillas en las elecciones locales de alcaldes y gobernadores y la influencia de las mismas frente a la destinación y administración de los recursos es posible en tanto su influencia se da en regiones en las que no hay un fuerte apoyo de la fuerza pública a los mandatarios locales y a los procesos electorales de los mismos (Ortiz, 2006, p. 329).

Todas estas fuentes de financiación sirvieron para proveer a las guerrillas de una base social nueva en tanto se generó por parte de la población ligada a las actividades económicas de las cuales se financiaban las guerrillas, una cierta dependencia frente a las mismas, en especial en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Gracias al vínculo con el narcotráfico los guerrilleros ganaron el control de unas comunidades que se convirtieron en una de sus principales fuentes de apoyo, recursos humanos e influencia política. Por la vía del control de los recursos nacionales y extranjeros también se ganaron el favor de las comunidades a cambio de garantizar que contratos, inversión o empleos se quedaran en ellas.

La violencia, con el combustible del narcotráfico y con el cambio de lógica de las organizaciones armadas que se vuelcan más hacia la consolidación de redes de poder, invade casi todo el país. La llamada violencia política elimina cada vez más las fronteras con la llamada violencia común. La economía ligada a la droga genera una ruptura en la dinámica de la violencia y del conflicto mismo. Los procesos de violencia adquieren su propio dinamismo independientemente de la dinámica de los factores de desigualdad e injusticias asociados al origen del conflicto. Los desequilibrios sociales y la pérdida de derechos aparecen ahora también como consecuencia de la misma violencia.

La dinámica de la economía ligada a los cultivos de uso ilícito es posible en Colombia por la existencia de zonas en el país que logran escapar del control del Estado y que se encuentran bajo la tutela de organizaciones armadas ilegales (Pécaut, 2003, p. 96). En estas zonas las organizaciones armadas demandan de la población adhesión colectiva y esta accede en virtud de algunos beneficios que logra con tal adhesión y gracias a la existencia de una dinámica previa de vínculo interesado y clientelista propio de la relación con gamonales y partidos. A cambio de los beneficios que la comunidad recibe, la adhesión a la organización armada supone la supresión de toda forma de acción colectiva. La acción colectiva desaparece de la misma forma en que lo hacía cuando los partidos eran los encargados de canalizar las reivindicaciones de la población (Pécaut, 2003, p. 105). En esta nueva fase de la violencia y del accionar de la guerrilla su capacidad de impacto en las regiones en las que tiene dominio se aumenta y con ello se afecta la posibilidad de la sociedad civil presente en estos territorios de echar a andar sus proyectos y de configurar su accionar con autonomía.

El combustible del narcotráfico en la guerra va a

generar en el país un clima de inseguridad tal que obliga a que los gobiernos se tomen mucho más en serio la política de seguridad y el tema de la paz. A continuación se dará una mirada a lo que ha sido la política de paz en el periodo estudiado, desde el tratamiento que le han dado a la misma los gobiernos.

V. LA PAZ Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

Desde el gobierno de Turbay a finales de los 70 y comienzos de los 80 hasta nuestros días la política de paz ha tenido diversos tratamientos. Es en este periodo en que la guerrilla comienza su fortalecimiento militar y su mutación política. En el gobierno de Turbay (1978-1982) se privilegia una salida militar. Para ello se crea el llamado (Estatuto de seguridad nacional). Esta opción por lo militar sigue la doctrina de la seguridad nacional impuesta desde Estados Unidos y en el marco de su lucha contra el comunismo (García, 2006, p. 481). El manejo de la seguridad, como ya se mencionó, es entregado a las fuerzas militares y estas, gozando de las libertades que se les confieren, van a cometer muchas violaciones a los derechos humanos contra la población civil, en el marco de la lucha antisubversiva y en la ya mencionada lógica de eliminación violenta de la diferencia y resolución violenta de los conflictos.

El gobierno de Betancur (1982-1986) promovió una solución política al conflicto a partir de la propuesta de un diálogo nacional que pretende la participación de las diversas fuerzas políticas del país. Buscó tramitar en el congreso una ley de amnistía y conformar una comisión de paz para adelantar los diálogos con la guerrilla. Estos diálogos se quedan prácticamente estancados y limitados a una tregua pactada con los más importantes grupos guerrilleros FARC, EPL y ADO y algunos sectores del ELN. La política y la propuesta de paz del gobierno no contaron con el suficiente respaldo de todos los sectores sociales del país. Algunos de estos como los militares, los partidos, los gremios e incluso la iglesia emprendieron una campaña de oposición al gobierno y su política de paz. (García, 2006, p. 481-482). El gobierno, pese a haber ofrecido la idea de un proceso de paz que incluyera reformas sociales, no logró contar con el consenso de las diversas fuerzas sociales y políticas del país en el nivel local y nacional. El diálogo de paz careció del suficiente respaldo político (García, 2006, p. 486)

Por su parte las FARC, una de las organizaciones que entra en los diálogos, va a desperdiciar esta oportunidad

que se le abre y, desde su voluntad de combinación de todas las formas de lucha va a supeditar los diálogos y la salida política, a la lógica militar y guerrillera. La guerrilla ve las negociaciones de paz desde el punto de vista de las oportunidades que con ellas se les abren. La apuesta en relación con la paz se convierte en el escenario para mantener una cierta visibilidad política. Sin embargo siguen apostándole a la guerra y aprovechan la tregua para fortalecerse militarmente asumiendo la intención de una guerra de posiciones. El número de frentes guerrilleros en el periodo se incrementó en un 200 por ciento (García, 2006, p. 484). Las FARC Mantienen en el periodo la intención de consolidar un ejército revolucionario que condujera a la construcción de un gobierno provisional, desde un plan para 8 años trazado en 1983 (García, 2006, p. 148).

El gobierno de Barco (1896-1990) hereda la política de paz del anterior. En su mandato se va a lograr el único modelo exitoso de negociación. Un modelo de negociación parcial, con agenda limitada, con una fuerte conducción por parte del Estado, en particular de la presidencia, quien se aprovechó en ese momento de las condiciones de superioridad militar en las que se encontraba frente a algunas guerrillas. Se creó la consejería de reconciliación, normalización y rehabilitación desde donde se condujo la política de paz. Fue un proceso con poca participación de la sociedad y con mucho direccionamiento por parte del ejecutivo.

En un primer momento la política de paz se concentra en el Plan Nacional de Rehabilitación y en el proceso de descentralización política y administrativa con los que se pretende atacar las llamadas causas objetivas de la violencia guerrillera. Se pretendía la integración de las zonas pobres y marginadas del país y así quitar respaldo o base social a la guerrilla. Esta política de paz tiene la pretensión de limitar la visibilización política de las guerrillas. Esta voluntad de paz se va a tener que poner a prueba ante el recrudescimiento de la violencia narcoterrorista.

En virtud del incremento de la violencia y de la entrada en ella del narcotráfico, el gobierno lanza su iniciativa para la paz. En esta iniciativa rechaza la participación de la sociedad civil. El objetivo primordial es la desmovilización de las guerrillas a cambio de permitirles su participación en la política legal. Tampoco se incluye dentro de las posibilidades de negociación transformaciones en las estructuras políticas o económicas. Para las negociaciones se exige a la guerrilla una tregua unilateral. Solo el M-19

acoge esta iniciativa de paz. Esta guerrilla se concentra en un territorio delimitado y el gobierno asume su sostenimiento mientras duran las negociaciones. En el transcurso de la negociación se introduce el tema político desde la aspiración del M-19 de negociar sus posibilidades de participación política. Pero la tentativa de un acuerdo político más allá de la participación en el escenario electoral se perdió. El interés del gobierno en ese momento no logra ir más allá de la desmovilización y su posición en relación con esa guerrilla le permite colocar ese límite. El M19 por su parte está en una condición de debilidad que le obliga a aceptar esos términos. El principal logro en la iniciativa de negociación con el M19 fue el intercambio de paz por participación democrática de esa guerrilla y la consolidación de un modelo de negociación exitoso frente a grupos pequeños y débiles en la correlación de fuerzas frente al Estado (García, 2006, p. 486-487).

El gobierno de Gaviria (1990 - 1994) asume el mismo modelo de negociación implementado con el M-19 para la negociación con el EPL, PRT y Quintín Lame. La exigencia de tregua, la concentración en campamentos controlados por el ejército y la no participación de la sociedad civil. Una diferencia frente al proceso con el M-19 fue el lograr el compromiso por parte del gobierno en cuanto a planes de desarrollo para las regiones de influencia de estos grupos. (García, 2006, p. 488). El EPL logra colocar para la zona de su influencia temas relacionados con lo laboral y con los grupos paramilitares y el Quintín Lame asuntos relacionados con los territorios indígenas. Finalmente todos los grupos que se desmovilizaron lograron participar en la asamblea nacional constituyente.

La Asamblea Constituyente fue utilizada como elemento de presión hacia los grupos insurgentes y como mecanismo de consenso nacional incluso frente a los acuerdos de paz. Con la firma de la constitución y la intención de presentarla como un acuerdo nacional de paz, la política en esta materia se modifica para posibilitar la negociación con las guerrillas en un diálogo con la coordinadora guerrillera, fuera del país y sin la exigencia de tregua. En Caracas y Tlaxcala, escenarios de las mesas de diálogo se logran acuerdos en relación con la definición de una agenda y de las condiciones de verificación del cese al fuego y de veeduría internacional del proceso.

Pese a abrirse las negociaciones con la coordinadora guerrillera (espacio de confluencia de las guerrillas del país),

lo que significaba entrar en acercamiento con las FARC y el ELN, las principales dificultades estaban puestas en la posibilidad de alcanzar acuerdos significativos en materia política. Para el gobierno, con la nueva constitución, no eran necesarias más reformas, para la guerrilla estas seguían siendo necesarias, además ellos no participaron en la elaboración de la nueva constitución (García, 2006, p. 489). Mientras se daban las negociaciones el gobierno emprendió una política agresiva para derrotar por la fuerza a las organizaciones violentas. La estrategia de paz y guerra no fue efectiva frente a FARC y ELN. La estrategia de desmovilización heredada del anterior gobierno solo fue efectiva frente a la Corriente de Renovación Socialista y a milicias urbanas de la ciudad de Medellín. Pese a esta política de persecución por la fuerza, las guerrillas más fuertes en lugar de ser diezmadas se fortalecieron en el siguiente cuatrienio 94-98 (García, 2006, p. 490).

El gobierno de Samper (1994-1998) heredó el problema de unas guerrillas muy fortalecidas y de una criminalidad exacerbada por el tema del narcoterrorismo. Pese a tratar de consolidar una propuesta de paz, su gobierno se vio desgastado con el proceso por infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña electoral, lo que lo sumió en una crisis de legitimidad que le impidió maniobrar ante los sectores políticos que abogaban por la salida militar al conflicto. Las fuerzas militares se opusieron a la desmilitarización de una zona en la Uribe Meta para adelantar diálogos y la guerrilla no quiso dialogar con un gobierno deslegitimado políticamente por sus vínculos con el narcotráfico. En materia de paz este gobierno solo pudo pactar un acuerdo humanitario con las FARC para la liberación de 70 soldados retenidos. Ante la escalada de ataques por parte de la guerrilla en los que el ejército se ve seriamente afectado crece en el país el clamor por una solución negociada al conflicto. Este clamor se materializa en el llamado mandato ciudadano por la paz (García, 2006, p. 490).

En el gobierno de Pastrana (1998-2002) se van a dar dos tendencias contradictorias. Por un lado están los diálogos con las FARC en una zona desmilitarizada. Por otro lado el fortalecimiento militar del Estado gracias al aumento de recursos y de ayuda militar de los Estados Unidos para la confrontación con las guerrillas y el narcotráfico. El Plan Colombia supuso un apoyo para esta iniciativa de modernización de las fuerzas militares y de adaptación de las mismas a los desafíos en que las colocaban las guerrillas.

La coyuntura que aprovecha el presidente para legitimar su propuesta de paz es el Mandato por la paz que en octubre de 1997 logra recoger aproximadamente 10 millones de votos que se pronunciaron a favor de una solución negociada, creando un mandato general por la paz que además de contar con la favorabilidad de las diversas fuerzas políticas en el país, se constituye en una bandera del presidente pastrana (García, 2006, p. 491). Para el final del gobierno de Samper la opinión pública consideraba que la única salida a la guerra era un diálogo tendiente a la desmovilización de los grupos al margen de la ley.

El propósito de las negociaciones de paz por parte del gobierno es lograr la desmovilización de los grupos armados. La idea de fortalecerse militarmente supone la apuesta por una presión que conduzca a la desmovilización. Sin embargo entre las cúpulas militares y el gobierno no se dio la suficiente coordinación para combinar ambas estrategias en una apuesta conjunta hacia la paz. La autonomía de la cual históricamente gozaban las fuerzas militares para la conducción de los temas de seguridad impidió el desarrollo de una estrategia integral por parte del gobierno para derrotar a la guerrilla y conducirla a la desmovilización (Ortiz, 2006, p. 334).

El modelo de negociación es similar al impulsado por Betancur: diálogo en medio del conflicto, con una agenda abierta y un amplio despliegue diplomático nacional e internacional. El otro componente del proceso es el Plan Colombia con el que se pretende ofrecer desarrollo e inversiones que respalden la paz, que luego se reducirá al componente puramente militar apoyado por Estados Unidos en un tránsito de un énfasis antidrogas a una clara intencionalidad de involucrarse en la lucha antiterrorista en el contexto del énfasis antiterrorista del gobierno de Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001.

La política de paz tuvo muchos vacíos: desmilitarización de territorio sin veeduría y control, agenda excesivamente amplia, fallas en la concertación con los militares, insuficiente movilización social en torno al mismo y negociación en medio del conflicto (García, 2006, p. 492). La ruptura del proceso de paz con las FARC obedeció a dos tensiones del mismo: la zona de distensión y los grupos paramilitares. El único logro de este proceso fue un intercambio humanitario entre soldados y policías retenidos, por guerrilleros presos enfermos.

Los grupos guerrilleros le apostaron a aprovechar las oportunidades políticas que generaban las negociaciones

con el gobierno. La apuesta de las FARC era la combinación de todas las formas de lucha así que los diálogos eran una forma de lucha contra el Estado. El objetivo de los diálogos para las FARC no era la desmovilización. Con los diálogos ellos siguen pensando en la toma del poder. La guerrilla pretende llegar a la mesa con una posición de poder y por ello antes y durante los diálogos incrementa sus acciones militares con el fin de ganar posición en la mesa. Los diálogos de paz se mantienen en medio de la guerra y las FARC cuenta con una extensa zona desmilitarizada y bajo su control en la cual va a desarrollar toda suerte de actividades en aras de su crecimiento de cara al fortalecimiento que se está operando por parte del ejército. La guerrilla, al amparo de la zona de despeje logra aumentar el número de sus efectivos y fortalecer su entrenamiento militar, al igual que su armamento. Las negociaciones fueron aprovechadas además por parte de las FARC para evidenciar el problema del paramilitarismo y la necesidad de su desmonte como una condición para la paz. La guerrilla condicionó la negociación a que no se diera ningún diálogo con los paramilitares. En la medida en que la capacidad militar del gobierno se hace visible la zona de despeje y la visibilidad política que la organización logra en ella se torna más patente y necesaria (Ortiz, 2006, p. 337-338). La consecuencia de la apuesta de los dos bandos por jugarle a la negociación y a la guerra como mecanismo para posicionarse en la mesa condujo a un escalamiento de la guerra y la barbarie (García, 2006, p. 493)

Del lado del Estado y las fuerzas militares hay, más que nunca, capacidad y voluntad de mostrar superioridad en la confrontación militar. Las fuerzas militares se logran fortalecer con el apoyo del Plan Colombia. El ejército logró mostrar superioridad frente a las FARC y la obligó a replegarse en su estrategia de guerra móvil. El fracaso de los diálogos de paz y el cansancio de la opinión pública ante su manifiesta poca voluntad de negociación fortaleció el ascenso a la presidencia del candidato que prometía la derrota militar de la guerrilla (Ortiz, 2006, p. 342). Rotas las conversaciones con las FARC como consecuencia del doble juego de las partes (guerra y paz) la euforia generalizada frente a la negociación se tornó en apoyo a la propuesta de derrota militar de la guerrilla (García, 2006, p. 494).

En cuanto a los procesos de paz con el ELN en el periodo los avances son menores ya que ni siquiera se logra llegar a una mesa de diálogo con miras a la paz. Lo

máximo que hay son acercamientos en torno a plantear condiciones de posibilidad para la negociación. En el fracaso de los acercamientos con esta guerrilla juega mucho la fallida experiencia del proceso con las FARC y lo que esto significa para la legitimidad del gobierno y de otro lado la menor capacidad de presión de esta guerrilla. En 1998 hay un acuerdo firmado en Alemania entre ELN y sociedad civil. Sin embargo el énfasis de Pastrana estuvo concentrado en la paz con las FARC. Se iniciaron conversaciones pero el gobierno no quería cederles lo mismo que a las FARC. Dos acciones espectaculares del ELN, el secuestro en 1999 de un avión con todos sus ocupantes, y el secuestro masivo en este año en la iglesia la maría en Cali, frenaron las posibilidades de acercamiento entre las partes.

A la hora de las negociaciones de paz el ELN pretende ventajas que el desgaste político del gobierno está en incapacidad de dar, tales como una zona desmilitarizada para el encuentro y los diálogos. En abril de 2001 se rompe la posibilidad de diálogo ante la imposibilidad de establecer tal zona de encuentro. La solicitud de unos municipios para tal efecto fue rechazada fuertemente por los paramilitares y la población civil influenciada por ellos. En Cuba se intenta lograr en aras de la negociación un cese al fuego por parte de este grupo. Un punto de quiebre para esta iniciativa fue la exigencia del ELN de ser subsidiados por el Estado mientras durara el cese al fuego. Pese a varias reuniones en diversos países y a la determinación de las características de la participación internacional, en agosto de 2001 se rompen los acercamientos con el ELN y se le retira a esta organización el estatus político. Las condiciones en las que terminó el periodo de gobierno y la difícil experiencia de diálogo con las FARC imposibilitaron viabilizar un proceso con el ELN.

Para este periodo ya los paramilitares han logrado acumular una mayor capacidad de golpear a las guerrillas y sobre todo a la población civil de los lugares en los que tienen su accionar las guerrillas, es decir, de sus reales y supuestas bases sociales. El ELN tiene menor capacidad para enfrentar el embate paramilitar. Su organización es más vulnerable en tanto sus militantes combinan acción política y militar y muchos están insertos en la vida civil. La dependencia del ELN del respaldo social los hizo más vulnerables (Ortiz, 2006, p. 339). La agrupación se debilita militarmente por el accionar paramilitar sobre ella, políticamente por el fracaso de los intentos de concertar un proceso de diálogo y organizativamente por las crisis y

divisiones que estos procesos generan a su interior sumados a las ya tradicionales disputas por el poder en la organización. La desarticulación se evidencia en la escasa capacidad de conducción que el comando central tiene sobre las estructuras regionales o locales, por el desmembramiento de la organización y por la fuga de algunos de sus militantes hacia las FARC y hacia los grupos paramilitares (Ortiz, 2006, p. 341).

Durante el gobierno de Uribe (2002-2010) no se avanza en la paz con las guerrillas ya que su promesa de campaña y su estrategia de seguridad pasa por pretender la rendición de las mismas. El Plan Patriota, continuación del Plan Colombia, es la estrategia para hacer manifiesta la superioridad militar del Estado colombiano frente a los grupos ilegales, trasladando el costo de la misma a las finanzas de la Nación. Va de la mano con la política de paz. Las negociaciones de paz en este contexto serán solo el apéndice de la derrota militar que se pretende sobre la guerrilla. Otra vertiente de la política de paz es el avance en el cuestionado proceso con los paramilitares que va a conducir a la firma de un acuerdo para la desmovilización de los mismos al amparo de un marco jurídico especial y sobre el cual también se han levantado innumerables críticas.

El gobierno de Uribe entra a considerar a la insurgencia como terrorista. El énfasis del gobierno es brindar protección y seguridad a los ciudadanos. Se apuesta por una salida militar del conflicto supeditando las negociaciones a la desmovilización y rendición del oponente. La premisa de este gobierno en materia de paz es que la negociación solo es posible después del cese al fuego. La política de paz se basa en la idea de que en Colombia no hay conflicto armado interno sino una amenaza terrorista (García, 2006, p. 496-497). La paz hace entonces necesaria la rendición de las guerrillas por lo tanto la política de paz es la guerra, lo que significa en última instancia que no hay propiamente una política de paz. Lo que hay es una política de defensa y seguridad que se inscribe en la nueva doctrina promulgada por los Estados Unidos de combate al terrorismo, que también tiene, como el comunismo, un carácter internacional.

La política de defensa y seguridad democrática prometió la restauración del control territorial y la seguridad de los ciudadanos. Esta política se basa en la ofensiva en zonas en las que domina la guerrilla y en el aumento de la vigilancia en las vías. Se pone en marcha el Plan Patriota, continuación del Plan Colombia, del que, en

detalle, la sociedad colombiana tuvo un acercamiento mediado por los intereses impuestos a la prensa (Ayala & Aguilera, 2002), pero con un marcado énfasis militar y abiertamente antisubversivo, cuya prioridad fue la recuperación de zonas de control guerrillero, en particular la zona de acción del bloque sur, y dismantelar la infraestructura que la guerrilla había logrado consolidar durante los años 90 y que había posibilitado la magnitud de su accionar en esa época (Ortiz, 2006, p. 344). La política de seguridad logra destruir la amenaza sobre Bogotá y obligar el retiro de las FARC de sus alrededores. Algunos resultados positivos en materia de seguridad hacen pensar a este gobierno que se está ganando la guerra y que solo hace falta someter al reducto de las FARC que se encuentran en el sur del país. Este es el énfasis que se coloca al Plan Patriota. Sin embargo las FARC han movido de esta zona sus frentes y se han desplazado a otros lugares del país asestando en estos importantes golpes a la fuerza pública. Durante los primeros años del gobierno de Uribe las FARC multiplicaron sus acciones armadas en un 122% (García, 2006, p. 505). El Plan Patriota se concentra en un gran despliegue militar en los departamentos del sur del país en los que se encuentra las FARC. Una de las pretensiones de este ataque es golpear al secretariado de la organización insurgente (Ortiz, 2006, p. 345).

Ante este cambio de rumbo en materia de seguridad y en el discurso del Estado en torno a la paz, las FARC intenta acciones para desgastar a la fuerza pública mientras trata de mantener intactas sus estructuras y su fuerza propias. Cambia su forma de accionar tratando de adaptarse a la nueva capacidad de las fuerzas militares de hacer frente a los ataques con gran despliegue de fuerza a los que se acostumbró las FARC en la década del 90. Ahora va a renunciar a las operaciones de gran envergadura y enfatizar en la guerra de guerrillas. La reducción del tamaño de las fuerzas en los ataques las ha hecho menos vulnerables en la medida en que se han vuelto menos fáciles de detectar y han desarrollado una mayor capacidad para huir. Hay una suerte de economía de fuerza por parte de las FARC que obedece de alguna manera a su intención de tomar posición frente al escenario político. La presión militar de la guerrilla se incrementa en la medida en que se aproxima el año electoral en 2006 (Ortiz, 2006, p. 346).

Tanto el nuevo gobierno como las FARC se plantean la importancia de la capital de la república. El gobernó la quiere proteger del cerco que ha consolidado las FARC en

sus alrededores. Las FARC intentan desafiar al nuevo gobierno con una toma de la ciudad en un intento por trasladar del campo a la ciudad la guerra y de visibilizarla entre las capas medias de la sociedad. Ante el fin de la zona de despeje y la consecuente posibilidad de coordinar grandes acciones de despliegue de fuerza las FARC se ven reducidas a desencadenar acciones terroristas de gran impacto pero con la participación de pocos efectivos. Tal es el caso de los ataques al club el nogal en 2003 y el lanzamiento de bombas dirigidas hacia el palacio de Nariño el día de la posesión del presidente Uribe el 7 de agosto de 2002. El gobierno por su parte logra rápidamente detectar y dismantlar las estructuras de las FARC en la capital y con ello se disminuye su capacidad de impactar en esta ciudad (Ortiz, 2006, p. 344). De otro lado la presión del ejército sobre las zonas en las que ha estado las FARC ha hecho que estas se desplacen hacia lugares nuevos o sitios donde se ha dado la desmovilización y la salida de los paramilitares (Ortiz, 2006, p. 344).

Tras la ruptura de los diálogos con Pastrana y con la llegada de Uribe al poder se da uno de los momentos de mayor aislamiento de la guerrilla. El triunfo político de la izquierda en las elecciones para la alcaldía de Bogotá en 2004 deslegitimó a la guerrilla como única opción de poder. A este desprestigio contribuyó el discurso antiterrorista instalado en el escenario mundial a partir del episodio en los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Las FARC fueron declaradas como terroristas por varios países (Ortiz, 2006, p. 346).

La única opción de visibilización política que le queda a las FARC durante este gobierno va a ser la posibilidad de lograr la negociación en torno al intercambio humanitario de retenidos por esta guerrilla por guerrilleros presos. La propuesta de diálogo en torno al intercambio de guerrilleros por secuestrados le permitió a las FARC superar de alguna manera el aislamiento en el que había quedado sometida. La posición del gobierno es: sin desmilitarización de ninguna zona, con la liberación de todos los secuestrados, que los guerrilleros liberados no vuelvan a delinquir y contar con un tercero que facilite la negociación. Para las FARC pese a haber cedido en sus pedidos, se mantiene la exigencia de una negociación en el país, en zona desmilitarizada y la inclusión de dos de sus guerrilleros extraditados a Estados Unidos en el grupo de canjeables. Sin embargo, la rigidez de las posiciones de ambas partes dificulta el acuerdo humanitario. En buena medida se debe a la utilización de ambas partes de este

tema como un tema político del que cada parte aspira sacar el máximo provecho con el menor costo e impedir que la otra parte se beneficie políticamente (García, 2006, p. 506).

Los acontecimientos latinoamericanos en relación con el acceso al poder de la izquierda en algunas naciones posibilitaron un clima ideológico más favorable para las FARC generando en ella la pretensión de un mayor grado de receptividad en el continente (Ortiz, 2006, p. 347). En el país sin embargo las FARC entran en el mayor deterioro de su imagen. Por cuenta de la política de seguridad democrática y del discurso antiterrorista en que se sostiene se genera en el país una polarización de la sociedad en torno a la guerra, materializada en la guerrilla y particularmente en las FARC. De esta manera la política de seguridad se ve reforzada por la estigmatización del gobierno de los actores defensores de derechos humanos o de una idea de paz distinta a la esbozada por el gobierno (García, 2006, p. 498). El país se divide entre quienes combaten a las FARC con un discurso proclive a la derrota militar de las mismas y quienes siendo contrarios a este discurso son ubicados entre los apoyos de la guerrilla.

El gobierno de Uribe parece pensar que el triunfo en el terreno militar exime de una propuesta de paz que vaya más allá de la desmovilización. Ha cerrado las puertas a la negociación con la insurgencia al desconocer la existencia de una de las partes enfrentadas en el conflicto. El tratamiento que da a la consolidación de los poderes paramilitares genera un argumento para sostener y legitimar la necesidad de existencia de la guerrilla y su permanencia en la lucha armada.

El proceso con los paramilitares va a mantenerse en la lógica planteada por el gobierno de solo abrir posibilidades de negociar con quienes ordenan el cese del fuego. A través de la Iglesia Católica de las regiones en las que hay fuerte accionar paramilitar se comienzan acercamientos con los líderes de estos grupos. Se modifica la ley para permitir dialogar con actores sin reconocimiento político (ley 782 de 2002). Luego del cese al fuego de diciembre de 2002 comienza entre este año y el siguiente una fase exploratoria de acercamiento con estos grupos, cuyo informe es avalado por el gobierno. Comienza una fase de negociación en Santa Fe de Ralito en Córdoba en julio de 2003 donde se establece como objetivo la desmovilización de todos los paramilitares para diciembre de 2005. Un año después se acuerda una zona de ubicación de los grupos paramilitares en Tierralta, Córdoba. Se acuerda con la OEA una misión garante y de verificación al proceso de

paz para corroborar que se dé la desmovilización y el cese al fuego (García, 2006, p. 498).

La agenda de negociación con los paramilitares evidencia que lo que se está pactando es la desmovilización de un actor armado que en lugar de oponerse, está cerca del gobierno, ya que no es necesario incluir en la negociación temas en relación con lo social o lo político, sino solo lo relativo a las condiciones jurídicas de desmovilización. Como sostiene el comunicador y politólogo Germán Ayala (2015), este proceso no es propiamente un proceso de negociación o diálogo en la medida en que no se hace entre oponentes y por tanto no es equiparable al que se hace con las guerrillas. Los paramilitares se sienten representados por el gobierno de Uribe, de alguna manera sienten que ya su lucha no es necesaria en virtud de la política de este gobierno en materia de defensa de los ciudadanos. Lo que se negocia entonces son las garantías para su desmovilización. Por ello el punto central de este proceso es el marco jurídico en el que se haga la desmovilización evitando a toda costa que tengan que responder penalmente por todos los crímenes cometidos y por sus vínculos con el narcotráfico. Este es el papel de la ley de justicia y paz, fuertemente criticada en el ámbito nacional e internacional, en particular por organizaciones de derechos humanos. Se plantea que con dicha ley se estaba librando a los paramilitares de responder por sus crímenes y por su carácter de rendición ante las mafias terroristas. Desde muchos sectores se piensa que tanto la ley como el proceso son cómplices de la impunidad y legalización del narcotráfico y sus dinámicas en diversas regiones del país y que no desmontan el paramilitarismo como fenómeno social y político. Por la forma de este proceso se advierte la posibilidad de surgimiento de nuevas estructuras del paramilitarismo ligadas al narcotráfico.

Otro elemento a tener en cuenta durante este periodo y ligado a este proceso de desmovilización es la intervención cada vez más expresa de los paramilitares en la dinámica electoral de la nación. Si bien en muchas regiones históricamente han ejercido presión sobre los votantes, es cada vez más manifiesta su intencionalidad de pisar la arena política (García, 2006, p. 500-503). Manifestación de ello es el aumento de procesos penales contra parlamentarios acusados de tener nexos con los paramilitares que se traducen en el ingreso de dineros de la mafia en las campañas políticas, en presión sobre los votantes en sus zonas de influencia y en la comisión de

crímenes contra personas contrarias a las lógicas de poder imperantes en las regiones de influjo de los paramilitares o los parlamentarios en cuestión.

En el gobierno de Uribe se logran algunos acercamientos frente al ELN. Se intentan conversaciones contando con el favor de gobiernos de otros países. Sin embargo hay una negativa de la organización al cese de hostilidades y a poner fin al secuestro, y una insistencia por parte del ELN en dialogar en el marco de una participación mayor de la sociedad civil, concesión que no es fácil de un gobierno que pretende bajarle perfil político a las guerrillas y a los procesos de negociación con las mismas. Se dan sin embargo acercamientos en el marco de la posibilidad de definir una agenda de negociación para lo cual se facilita la salida de prisión del líder de esta organización Francisco Galán, preso en una cárcel, para que comience a viabilizar los acercamientos con el comando central. En este proceso se logra una mínima vinculación de la sociedad civil y se alcanza a pactar un encuentro formal exploratorio en Cuba que comienza en 2005 y se retoma en 2006. Los planteamientos de los voceros del ELN hacia la sociedad civil retoman la necesidad de desmontar el paramilitarismo como condición para la paz. Otro tema capital allí es el de la existencia de condiciones para la participación política de los desmovilizados así como la garantía de la seguridad para los mismos.

En el momento de estos acercamientos con la sociedad civil a esta organización le fueron asestados importantes golpes de parte de la fuerza pública y de los paramilitares, de los cuales no pudo recuperarse limitando su capacidad de acción. Al comando central le era cada vez más difícil mantener el control de sus estructuras en virtud de la relación de subordinación que en muchos lugares de presencia se había dado en relación con las FARC (Ortiz, 2006, p. 348). El ELN se encuentra fragmentado y sin capacidad de conducción por parte del comando central. La paz es una alternativa para ganar políticamente ante su quiebra militar. El cada vez mayor vínculo entre las unidades del ELN y las unidades de las FARC en el terreno hace más palpable esa fragmentación y más difícil que el pleno de la organización se acoja a una propuesta de paz (Ortiz, 2006, p. 350). Las principales dificultades con las que el gobierno se encuentra en este proceso están en la necesidad de lograr un acuerdo con este grupo sabiendo que el tema con las FARC está aún pendiente. De otro lado está el paramilitarismo y su no tan claro proceso de

desmovilización. Habría que pensar en cómo garantizar seguridad y participación política a esta guerrilla (García, 2006, pp. 503-504).

El último periodo de gobierno, el del presidente Santos (2010 - 2014), se inaugura justamente con el cambio en la concepción en relación con el tratamiento del conflicto. De la radicalización del anterior gobierno frente a la inexistencia de un conflicto armado y su adscripción al discurso antiterrorista que desconoce el carácter político del oponente, se pasa en este gobierno al reconocimiento, en sintonía con sectores nacionales e internacionales favorables a la paz, de la existencia de un conflicto armado interno que tiene raíces sociales originadas en el problema agrario y cuya responsabilidad recae en el régimen político. El reconocimiento del conflicto y la apertura de una mesa de negociación en la Habana, consecuencia de un largo diálogo exploratorio, se materializa en un proceso de paz que tiene una agenda limitada (González, 2014, p. 551).

El proceso de paz que comienza en el gobierno del presidente Santos tiene características diferenciales con los anteriores procesos, pero también repite algunas de las experiencias que en los anteriores procesos han resultado fracasadas. Es un proceso fuera del territorio nacional, lo cual ya se ha intentado antes con los diálogos de Caracas y Tlaxcala. Es un proceso con agenda limitada lo que ya se hizo en los procesos de negociación con las guerrillas pequeñas y cuando estas estaban en condiciones de debilidad militar. Es un proceso que se está dando en medio de la guerra lo cual ya antes ha fracasado en los intentos de paz con las FARC.

La limitación en la agenda, calificada por algunos analistas como acotada, realista y poseedora de un enfoque reformista, más próximo al liberalismo progresista que al comunismo (González, 2014, p. 489), supone una apuesta política por parte de quienes negocian. Esta condición hace pensar en el realismo político de la negociación, pero demuestra además la no inclusión de la sociedad civil en el proceso de paz. Si lo que se discute y se negocia no logra sintonía con las necesidades y búsquedas de los diversos sectores sociales que han padecido las causas del conflicto social y los embates del conflicto armado, estaríamos ante una dificultad para el logro de una paz vinculante y duradera. Podría pensarse que este proceso con esta agenda se parece más a un intento de desmonte del actor armado haciéndole algunas concesiones, que al avance de las transformaciones necesarias para la superación de las causas estructurales del conflicto.

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El conflicto colombiano en su manifestación armada tiene una compleja historia que evidencia mutaciones en su dinámica y en las características de sus actores. Lo que no parece haber cambiado mucho es la forma de pensar la política de paz y conducir los procesos de negociación. Las políticas de paz salvo casos marginales han fracasado. Su fracaso está fundamentalmente en el desconocimiento y la falta de atención a las causas estructurales del conflicto, en la desatención a las mutaciones del mismo y en el distanciamiento que hay entre las iniciativas de paz y las realidades locales de los escenarios donde se da el conflicto lo mismo que de la sociedad civil presente en estos escenarios.

Las FARC y Colombia han cambiado. Las FARC conectan cada vez menos con la población. Su apuesta ha sido por una organización de tipo campesino con un tipo de guerra campesina y con reivindicaciones ligadas a este sector de la sociedad. Sin embargo la sociedad colombiana es cada vez menos rural por lo que su propuesta tiene cada vez menos eco. De otro lado el Estado y sus instituciones logran legitimarse cada vez más ganando consenso en torno a ellas. Tal es el caso del proceso de reforma a la constitución en 1991. Se ha fortalecido también la fuerza pública reduciendo el margen de maniobra de la guerrilla. La incursión en actividades económicas ilegales y el fortalecimiento financiero de las unidades de la organización se torna cada vez más en un factor de deterioro de la cohesión del grupo y de pérdida de la capacidad de conducción real por parte del secretariado. La cultura política del grupo se va minando también.

En los últimos dos gobiernos pese a los logros en materia de seguridad, la paz sigue siendo una importante deuda lo que evidencia la ausencia de una política de paz integral. Es decir, la realidad de la paz sigue siendo la misma que en los periodos analizados desde 1978. La solución militar ha sido una constante en todos los gobiernos y parece ser en el presente una propuesta.

En el anterior gobierno la guerra se consideró como mecanismo exclusivo para el fin de la guerra. En el presente se combina una estrategia de paz en medio de la guerra que ya se ha evidenciado en el pasado no resultar del todo exitosa. El Plan Patriota ha fortalecido la capacidad militar del Estado pero no ha logrado la derrota de las FARC y el narcotráfico no se ha reducido y sigue alimentando la guerra.

Las fallas de las diversas iniciativas de paz mencionadas tienen que ver con pretender que se puede dar una solución militar a un conflicto que va más allá de lo puramente militar. Otra gran falla es el aislamiento de los diversos sectores sociales del escenario directo de las negociaciones. La otra gran falla es pretender que el fin último de la negociación es la desmovilización de un actor. Es lícito enunciar que estas son justamente las características del actual proceso de negociación con las FARC. Los diversos sectores sociales están aislados del escenario de las negociaciones, sobre todo los sectores sociales y populares. Se dialoga en medio del fuego lo que supone un claro distanciamiento entre lo que pretende la mesa de diálogo y la política de seguridad por parte del Estado y lo que se constituye en una clara amenaza para el proceso mismo. Y finalmente en este momento es clara por parte del gobierno la pretensión de reducir el alcance de este proceso a la desmovilización. Ya vimos como por estas razones han fracasado las anteriores políticas de paz, es lícito esperar de la actual política un nuevo fracaso que en efecto no conduzca a la paz. Mientras tanto la violencia estructural y la guerra van a seguir desangrando el país, de la mano con el crecimiento de la economía ligada a la ilegalidad y en el escenario del fracaso de la política mundial antidrogas.

El Plan Colombia y su continuación, el Plan Patriota, se corresponden con una política de paz, sin embargo, y en aras de intereses de sectores, se torna en iniciativa para dar continuidad a la guerra. Los intereses de élites nacionales ligados a la doctrina en materia de lucha antiterrorista se toman el Plan Colombia y lo convierten en apoyo a la guerra en la lógica de propiciar la reducción militar del contendor a la vez que concentran su aplicación en las zonas de riqueza minero energética lo que hace pensar en la intención subyacente a la invasión a Iraq y Afganistán propias de la lucha antiterrorista. Un Plan Colombia y un Plan Patriota que operan en las zonas de explotación petrolera y que en lugar de derrotar a la guerrilla o combatir la producción de cocaína lo que hacen es desplazarla al igual que desplazan la influencia de los actores armados y el dominio paramilitar a las zonas de las cuales se desplazan las guerrillas y donde hay riquezas e intereses particulares sobre las mismas.

Un proceso de paz con las FARC llevado al margen de la negociación con el ELN puede ser un intento frustrado. Algunos de los actores de las guerrillas que han logrado desmovilizarse en anteriores procesos de paz han

terminado por incorporarse a bandas criminales ligadas al narcotráfico o a otras guerrillas. Es el caso del EPL, la disidencia del M19, el Quintín Lame por mencionar solo unos casos. Pactar la paz con las FARC y desmovilizar sus combatientes manteniendo la guerra con un grupo y sin haber atendido estructuralmente a la economía de la ilegalidad supondría direccionar actores hacia las guerrillas que queden fuera del proceso y hacia las bandas criminales ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal. Este fue el caso de la desmovilización de los paramilitares en el gobierno de Uribe. Sus combatientes son la base militar de las llamadas bandas criminales (BACRIM).

Se ha evidenciado en este trabajo que una de las falencias de los procesos de paz es haber dialogado por separado y en condiciones distintas con las guerrillas. Pensar un proceso de paz con una sola de las guerrillas y dejar a las otras por fuera supone que no se atiende a las causas estructurales del conflicto y de aparición de las guerrillas. Es el caso de los procesos de negociación que han devenido en la desmovilización de los actores. Se pactan las condiciones de la desmovilización en lo tocante a suspensión de penas y órdenes de captura o a la flexibilización de penas y eventualmente la participación en política, pero no se atiende a hacer transformaciones en las estructuras sociales. En el caso de las FARC y el ELN las posturas en torno a la paz en estas pasan por la atención a las causas objetivas del conflicto y por la correlación de fuerzas. Para el ELN por ejemplo, en el momento en que se dialoga con el gobierno desde la coordinadora guerrillera y cuando el M19 está a punto de pactar la paz, la negociación no es una posibilidad hasta tanto no se tenga una posición ventajosa de los sectores populares en la correlación de fuerzas (Pizarro, 1990, p. 336). Este tema de la posición del movimiento popular en la relación de poder sigue siendo una constante en los sectores más guerrilleros de esta guerrilla. La actual inclusión del ELN en el proceso que se adelanta con las FARC pasa también por la ampliación de la agenda ya que desde siempre, para esta guerrilla, el tema minero energético es central. De otro lado, el ELN plantea la necesidad de un cese bilateral al fuego.

Las FARC y el ELN, aunque distintas, comparten lecturas de país y de solución al conflicto por la vía política que suponen transformaciones en las estructuras económicas y políticas. Una paz sin pensar en esas transformaciones sería una paz incompleta. Y una paz con transformaciones estructurales con uno solo de los grupos

supondría un proceso similar pero en escenario distinto con el otro o los otros grupos lo cual sería un mayor desgaste, sin contar con la dificultad práctica de estar aplicando cambios a la estructura política, social y económica. Poco se habla por ejemplo hoy, en el actual proceso de negociación, del reducto del EPL que aún está activo en la vida militar y en la vida política. En ocasiones de parte de este sector se ha planteado toda una iniciativa por la realización de una constituyente. También es una de las estrategias de refrendación de los acuerdos de paz planteada por las FARC y por algunos sectores de la sociedad civil. Esto direcciona la reflexión hacia dos temas relevantes: la constituyente como mecanismo de refrendación de la paz y la participación de la sociedad civil en la construcción de la misma. Vale la pena con estos dos elementos introducir una consideración general sobre la manera en que los procesos de paz y las negociaciones han atendido a las mencionadas causas objetivas del conflicto.

Se planteó al considerar el origen de las guerrillas y su posicionamiento en el escenario político nacional que en buena medida estos grupos se justifican a sí mismos en la confrontación con un Estado represivo y excluyente. Las guerrillas se inscriben en la dinámica de hacer oposición por la vía armada y lo hacen de esta forma al considerar que los canales democráticos han sido capturados y cerrados por las élites económicas y políticas instaladas en el poder y representadas en los partidos tradicionales. El respaldo de la población les viene por la sintonía con ese discurso en contra de la represión de los gobiernos y de la exclusión económica y política. En la medida en que la guerrilla muta ligada a la economía de lo ilegal el respaldo de la población les viene también de su carácter de avanzada de la colonización campesina y de su favor y control frente a la economía de la coca.

La Asamblea Nacional Constituyente que crea la nueva constitución de 1991 en Colombia es presentada como resultado de procesos de paz. Una expresión popular mediante un voto por fuera de la formalidad electoral sirve de pretexto para que se convoque a las urnas a los colombianos para elegir a quienes han de modificar la constitución. A las guerrillas que por entonces participan en procesos de desmovilización se les concede participación directa en dicha asamblea. Se plantea entonces a las FARC y al ELN este como el escenario de canalización de sus demandas en materia política. Pero la asamblea nacional constituyente se hace sin ellos.

Pese a la importancia de esta nueva constitución en

materia de derechos y de generación de mecanismos de participación ciudadana, lejos estamos de haber superado con ella las llamadas causas objetivas del conflicto como la exclusión en lo político y lo económico y la represión como estrategia para anular la oposición, sin ser estas las únicas causas del conflicto aunque si algunas de las más notorias. En el origen del conflicto aparece la ausencia de una democracia verdadera y vinculante como se ha señalado en este trabajo. Pero los procesos de paz adelantados hasta el momento y la nueva constitución como pacto de paz y punto de llegada de dichos procesos de paz no logran generar una mayor democracia.

En el país sigue existiendo exclusión en materia económica y política. El modelo económico que se asume a partir del periodo presidencial en el que se redacta la constitución es el modelo que sigue las recetas del neoliberalismo y que ha generado pobreza y desplazamiento en el sector agrícola en Colombia. Los productores agropecuarios por cuenta del modelo económico de libre mercado y por cuenta de la guerra han venido abandonando en los últimos años sus tierras dejándolas a merced de monocultivos en manos de agroindustriales beneficiarios de la política económica. La demanda de las guerrillas de una reforma agraria integral no solo no se concreta sino que la forma de tenencia y explotación de la tierra se torna más excluyente y la guerra, con la participación de narcotraficantes, paramilitares y terratenientes hace aún más difícil las condiciones de los pequeños y medianos trabajadores de la tierra.

Si bien la constitución es presentada como un acuerdo de paz, la realidad es que no está ligada ni a la paz ni a la superación de las causas estructurales del conflicto. La constitución se convierte en un mecanismo de transformación de la ley en manos de las élites tradicionales que son quienes se toman las curules en este escenario. No hay que olvidar que el voto para esta asamblea es menor al obtenido ese mismo periodo para el congreso de la república y que los partidos tradicionales liberal y conservador van a ser grandes protagonistas en la conducción de esta asamblea. Si bien hay participación en la misma de sectores distintos a los partidos tradicionales, estos solo logran de forma marginal introducir reformas favorables a determinados sectores de la población. Reformas importantes que se han venido quedando en el papel y que difícilmente han podido llevarse a la concreción más allá del papel. Un ejemplo de ello son las legislaciones diferenciales para pueblos indígenas y

afrodescendientes. Importantes legislaciones que en el papel dan cuenta de la pluralidad de la nación pero que en la realidad mantienen a estas comunidades en el olvido y a sus acciones en defensa de estas legislaciones se las persigue y se las reprime.

Las FARC, el ELN, el EPL y sectores cercanos a estas guerrillas al igual que diferentes expresiones de la sociedad civil han planteado permanentemente dos temas cruciales para la paz. Un cese bilateral al fuego y una asamblea constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos que resulten del proceso de paz y como escenario para la participación de la sociedad en la construcción de un país que supere las llamadas causas estructurales del conflicto. El gobierno y sectores cercanos al mismo han dicho reiteradamente que no a estas dos iniciativas. Ya se ha evidenciado que de la constitución del 91 a pesar de coincidir con procesos de negociación no se derivó ni paz ni superación de las causas estructurales del conflicto. Una nueva asamblea constituyente podría devenir en lo mismo que la que reformó la constitución en 1991, un mecanismo para exacerbar el modelo que sostiene el conflicto.

La negativa del gobierno y el rechazo de sectores políticos a la refrendación de los acuerdos de paz por medio de una asamblea constituyente tienen también sus antecedentes en anteriores procesos de negociación. Mientras se está dialogando con las FARC en el gobierno de Pastrana surge la idea de una asamblea constituyente con participación de las FARC. Por entonces la voz de las autodefensas unidas de Colombia (AUC), expresión organizativa que recoge al paramilitarismo de las diversas regiones del país, comienza a ser visibilizada y atendida como una opinión con cierto peso en medio del proceso de negociación. Las AUC junto con sectores regionales del liberalismo que en ese momento es el partido de oposición al gobierno de Pastrana, hablan de la entrega del país a las FARC con la zona desmilitarizada y de la entrega de la legislación con la participación en una constituyente. Este rechazo a la negociación y a la participación política de las FARC y la coincidencia en el de sectores que luego integrarán el Uribismo con las AUC serán el caldo de cultivo para fraguar el posterior proceso de desmovilización de los grupos paramilitares (Romero, 2007, p. 422).

La clave del éxito para la paz parece estar entonces, a partir de lo hasta ahora planteado, en la forma en que en los procesos de negociación y de construcción de la paz se de la participación de la sociedad civil. Más de 50 años de

este conflicto sumados a muchos más años de instauración de formas violentas y excluyentes de hacer política han desdibujado la participación política y la sociedad civil. Sin embargo en medio de esta guerra han logrado sobrevivir pese a los embates de la misma expresiones de movilización social por parte actores de la sociedad civil. Es el caso de incipientes movimientos sociales de carácter agrario, de mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, estudiantiles, sindicales y otros que han sido y siguen siendo víctimas de esta guerra que se desarrolla en sus territorios y que ha puesto como objetivo militar a sus líderes. Estos actores entienden el conflicto desde dentro porque lo han padecido y porque el conflicto los ha tratado de invisibilizar y aniquilar.

Si el origen del conflicto es la ausencia de una verdadera democracia que resulte vinculante para el grueso de los sectores sociales del país, la salida al mismo ha de ser por la vía democrática. En este trabajo se ha mostrado que en los diversos procesos de negociación y de paz la sociedad ha estado ausente. En la reforma a la constitución que se hace en 1991 su participación es marginal y decidida desde el desgastado mecanismo electoral con los vicios que en este país el mismo tiene. Es imperante entonces dotar al actual proceso de paz de mecanismos para la participación de la sociedad civil, no desde la habana, sino desde los lugares en los que en la cotidianidad de la vida sucede la guerra y golpea a la sociedad en sus incipientes movimientos sociales. Esta participación ha de llegar por supuesto a plantear modificaciones estructurales que eliminen las causas del conflicto y como tal esto ha de hacerse con un mecanismo que tenga poder de transformación y de convocatoria como una asamblea constituyente que se le entregue a los diversos sectores sociales. Es decir una constituyente distinta a la de 1991.

El actual proceso de paz que se adelanta con las FARC en la habana, desde la lectura que se ha hecho con este trabajo, podría no conducir a la paz como la sueñan los colombianos. No cuenta con participación de la sociedad civil. Tiene una agenda muy limitada que no considera las causas estructurales del conflicto. Se da en medio de la guerra lo que ya ha mostrado no haber funcionado en otros momentos de la historia política del país. Y no contempla un amplio mecanismo de vinculación democrático de los colombianos a las decisiones en materia de paz. No cuenta además con el respaldo de los diversos sectores del país lo cual se ha visto ha sido un error de anteriores tentativas de paz. El actual proceso de

negociación tiene una fuerte oposición entre sectores que son proclives a sostener que solo se negocia la desmovilización y esto solo se logra cuando se ha rendido al enemigo y se lo puede confinar en una zona del país con la vigilancia del ejército. Esto ya se ha dado otras ocasiones en el país.

Los críticos actuales del proceso de paz hablan de la importancia de la derrota militar. Esta fue una promesa que ellos mismos hicieron y que por lo visto en este trabajo no cumplieron. Las FARC no han estado derrotadas. Se han visto diezmadas y esto las ha obligado a retornar a un campo que conocen y manejan muy bien, el campo de la guerra de guerrillas. Las FARC llevan 50 años escondidas en las zonas periféricas del país y en medio de la población de estas zonas, planeando y ejecutando ataques por sorpresa y manejando la economía de la ilegalidad. Eso no significa que estén derrotadas. Significa que están haciendo lo que siempre han hecho y lo que saben hacer. Pueden seguir haciendo esto por muchos años más mientras la coca y la minería ilegal sigan siendo posibles en un país donde el Estado no logra hacer presencia y ejercer control sobre la totalidad del territorio y sobre la economía de la ilegalidad. Pretender la rendición de las FARC o el ELN por la vía de la presión militar es una promesa de los partidarios de la guerra que ellos mismos no han podido cumplir y de la cual se han sabido lucrar. Un ejemplo de ello es la fracasada política de erradicación de cultivos en la cual se fue buena parte de la ayuda económica de los Estados Unidos a través del Plan Colombia.

La crítica al actual proceso de paz, en lo tocante a la supuesta falta de voluntad de las FARC, se instala en la conciencia colectiva a través de la manipulación mediática. Las FARC han decretado en el contexto de este proceso treguas que mal que bien han reducido la criminalidad de sus acciones. La ruptura de la tregua por parte de las FARC y la suspensión de la misma no necesariamente suponen ausencia de voluntad de paz. Supone si una determinación de presión militar en el contexto de la decisión de dialogar en medio de la guerra. Habría que recordar que en anteriores procesos de paz, cuando se han decretado treguas bilaterales, también de parte del gobierno y sus fuerzas de seguridad estas se han roto y habría que mencionar además que la alianza del Estado, las fuerzas militares, el narcotráfico y los paramilitares han minado ya en varias ocasiones los procesos de paz. El 28 de marzo de 1984 se firma una tregua con las FARC y en

seguida se registran muertes de miembros de la Unión Patriótica, ataques a las sedes del movimiento político, asesinato de líderes excombatientes del ELN, la retoma sangrienta del palacio de justicia, la desaparición forzada de los sobrevivientes de la retoma, lo que a las claras evidencia la falta de voluntad de paz de parte del gobierno (Delgado, 2009, p. 131). Años más tarde, cuando se está en plena euforia frente a la posibilidad de una asamblea constituyente que materialice el anhelo de la paz, el gobierno ordena el bombardeo de la sede de los diálogos con las FARC en el departamento del Meta. El camino de la paz es complejo. Hacer la paz en medio de la guerra es un riesgo y en ello siempre, de parte y parte, se van a ver comprometidas las voluntades de paz.

Hoy por hoy se escuchan iniciativas en orden a generar mandatos ciudadanos a través del voto para poner límites a la paz en materia de tiempo o para exigir que se decrete un cese bilateral al fuego. Estas son tentativas interesantes que ya se han dado en otras ocasiones y que de alguna manera permiten canalizar opiniones pero que distan de generar concreciones en materia de participación de la sociedad civil y en materia de paz, en particular si para ello no hay suficiente voluntad política. Un ejemplo de ello es el aquí mencionado mandato ciudadano por la paz que generó cerca de 10 millones de votos, es decir una votación mayor a la obtenida por cualquier presidente en este país, en favor de la paz. Después de este mandato se da vía libre al proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Pastrana. Pero, pese a este mandato ciudadano, tanto las FARC, como el gobierno de Pastrana, le siguen apostando a armarse y fortalecerse militarmente para derrotar al otro. Ninguno de los dos expresa una auténtica voluntad de paz y la negociación se rompe y viene, pese al mandato ciudadano por demás coyuntural y manipulado mediáticamente, un rechazo generalizado al proceso de paz y la elección de un gobernante que promete la derrota militar de la guerrilla y que trae consigo uno de los periodos más represivos, corruptos y antidemocráticos de la historia del país.

El actual proceso de negociación con las FARC, como muchos de los anteriores intentos de diálogo, transita entre la apuesta real por la paz y la prevalencia de los intereses de las partes vinculadas históricamente al sostenimiento de este conflicto. En este proceso, después de uno de los publicitados ceses unilaterales decretados por las FARC –y rotos por la misma– y de una no menos publicitada y temporal suspensión de bombardeos –rota también por el

gobierno—, la guerra siguió en su dinámica de los últimos 50 años, y el proceso de paz, como en los últimos periodos en los que se ha intentado, pareció agonizar. Esto habla de la fragilidad misma del proceso, pero también, y sobre todo, de la reducción del mismo a la lógica de la guerra y de los actores de la guerra, sacándolo de su natural escenario social. El conflicto pierde perfil y la guerra lo gana. Acontecimientos de orden militar, no políticos y menos sociales, ponen en crisis los diálogos. Lo punitivo y lo punitivo se instalarán en el trato que la agenda nacional se le dará a este tema en los días en los que se termina este artículo.

Los últimos acontecimientos en la mesa de diálogos de la Habana ponen de manifiesto que el acuerdo está cerca y se han planteado plazos para el mismo. Siguen sin embargo en el desconocimiento de la sociedad los acuerdos en detalle. Se han presentado ante la opinión pública nacional e internacional unos puntos de un posible acuerdo en materia de justicia restaurativa. Puntos que no parecen estar suficientemente desarrollados en la mesa y sobre los cuales hay un general desconocimiento por parte de la sociedad. La manera en que la sociedad en general, las víctimas del conflicto y los movimientos sociales están llamados a vincularse a este proceso, desde la realidad del mismo, parece reducirse a la refrendación más que a la participación.

Del fracaso de las políticas de paz anteriores hay que aprender que dialogar en medio del combate es muy riesgoso, que negociar lleva su tiempo y no se le pueden poner plazos fatales a un proceso de tantos años de guerra y conflicto, que sin sociedad civil, sin la participación amplia de las víctimas y sin el avance en la concreción de transformaciones estructurales que supriman la necesidad del conflicto, que eliminen la excusa de la guerra y que hagan de este un país más democrático, no es posible una paz verdadera. Es posible la desmovilización de un actor pero no la paz verdadera. En el actual proceso de negociación con las FARC parece estar cerca la desmovilización. Se puede con ello hablar del éxito de la política de paz de un gobierno. Sigue ausente la estrategia de paz del Estado y manifestación de ello es la permanente negación de la existencia del paramilitarismo y su política, y el ocultamiento de los intereses que sostienen la guerra, el guerrerismo y el trámite por la vía de la fuerza de las diferencias propias de la existencia de una verdadera democracia.

Se espera de la justicia, en el marco de la paz, un

tratamiento digno y respetuoso de las víctimas. Sin embargo, algunos de los principales opositores al diálogo con las FARC y a la implementación de la justicia diseñada en la mesa de la Habana son precisamente quienes han tenido cercanía con los victimarios.

Saludando lo que en materia de paz se avance en la negociación con las FARC, queda pendiente la paz como una política de Estado. Una paz desde la justicia para todas las víctimas, desde la verdad, desde la memoria y desde la garantía de no repetición, ni de los crímenes ni de los elementos detonantes de este conflicto. Una paz así solo será posible cuando se dé una democracia desde el respeto y el reconocimiento de la diferencia, y desde la garantía del derecho para quienes son diferentes.

El conflicto armado en Colombia se origina, en buena medida, por una práctica sistemática de exclusión política y económica de amplios sectores de la población. Esos sectores han estado ausentes de la participación y marginados del derecho. Manipulados por los actores políticos, olvidados por los gobiernos, victimizados y utilizados por la guerra. Hoy reclaman paz desde la justicia social y democracia desde la participación. Estos actores se han agrupado en movimientos sociales y han lanzado al país una demanda activa y constante por sus derechos. El conflicto les ha viciado su participación política, se las ha negado. La paz ha de ser el escenario en el que se construya democracia desde estos sujetos sociales. Pero la paz ha de construirse con ellos, en sus territorios, desde sus identidades. El acuerdo en la Habana ha de ser el comienzo de la construcción de democracia y paz para estos sujetos. Pero mientras no se les de voz, mientras se los siga persiguiendo e invisibilizando, no habrá verdadera paz y tampoco referentes para una real democracia.

La ausencia de consensos sociales en torno de la paz y la marginación que sobre la misma se impone a la sociedad, va acompañada de la suplantación de la opinión pública por parte de los medios masivos de comunicación y los sectores políticos a los cuales estos sirven. La prensa le da la palabra de forma permanente a quienes validan sin más el proceso de negociación y a quienes lo condenan en favor de sus intereses. Y sin atender el sentir de los diversos sectores sociales del país, los intereses que han estado detrás de esta guerra de más de cincuenta años y que se han lucrado de ella promueven desde un discurso mentiroso y tendencioso la permanencia indefinida de la guerra como salida al conflicto. Y mientras la sociedad asiste pasiva al espectáculo mediático de los defensores y

los detractores de este particular proceso de negociación, los temas que originan el conflicto se dilatan y la institucionalización del mismo se pospone aplazando de nuevo la entrada en la democracia, suplantándola por consensos mentirosos, de un lado, o por políticas guerrerristas, de otro. Este proceso, como los anteriores, le quita la palabra al sujeto social para entregársela a quienes han desconocido y manejado a su acomodo el conflicto, y con ello se han posicionado en el poder.

La democracia, como práctica real de los sujetos sociales y desde el reconocimiento del derecho para los mismos supone la canalización de los conflictos y el trámite de los mismos desde la posibilidad de encuentro y diálogo de las diversas voces, posturas y presencia de los sujetos sociales. El conflicto armado en Colombia es expresión del silenciamiento, por la fuerza, de esas voces. Mientras en el proceso de diálogo, negociación y solución política esas voces no tengan presencia, estaremos lejos de la canalización democrática del conflicto. Es aquí donde el tema de la paz se desconecta de la dinámica política de los movimientos sociales y se torna en un ejercicio de validación de la dominación de clase y del ocultamiento de las contradicciones en lo económico, lo ideológico y lo político en el país. En el origen del conflicto están las fuertes contradicciones que devienen en exclusión y marginación del grueso de los sectores sociales. Una paz verdadera y duradera demanda abordar esas contradicciones desde la voz y la participación de los sujetos. En tanto esto se dé, habrá un camino hacia la paz. De no darse estaremos ante una negociación fallida en su intento de ser diálogo social, exitoso solo en su pretensión de silenciar fusiles. Un fusil menos será siempre una ganancia, pobre ciertamente, si no se acompaña de democracia.

VII. REFERENCIAS

- Ayala, G. & Aguilera P. (2002). Plan Colombia, un año de autocensura. *Chasqui*, 79, 54-59.
- Ayala, G. (2013, febrero 21). *Del Caguán a la Habana: La guerra, asunto de estado, la paz, asunto de gobiernos* [La otra Tribuna]. Recuperado de: <http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2013/02/del-caguan-la-habana-la-guerra-asunto.html>
- Ayala, G. (2015, septiembre 23). *Dos procesos distintos* [La otra Tribuna]. Recuperado de: <http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/09/dos-procesos-distintos.html>
- Delgado, A. (2009). El experimento del Partido Comunista Colombiano. En *Una historia inconclusa. Izquierdas políticas y sociales en Colombia* (pp. 93-140). Bogotá, Colombia: CINEP.
- García, M. (2006). De Turbay a Uribe: sin política de paz pero con conflicto armado. En F. Leal [Ed.]. *En la encrucijada Colombia en el siglo XXI* (pp. 479-512). Bogotá, Colombia: Norma.
- González, F., Bolívar, I., & Vázquez, T. (2003). *Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- González, F. (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá, Colombia: CINEP.
- Ley 782 de 2002. (2002, diciembre 23). Diario Oficial No. 45.043. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.
- Ley 975 de 2005. (2005, julio 25). Diario Oficial No. 45.980. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.
- Marulanda, M., Arenas, J., Lozada, R., Yosa, I., Pardo, I., Pardo, L., ... Pérez, M. (1993, abril 2). *Programa agrario de los guerrilleros de las FARC-EP*. Marquetalia, Colombia: FARC. Disponible en <https://resistencia-colombia.org/farc-ep/documentos/157-programa-agrario-de-los-guerrilleros-de-las-farc-ep/>
- Ortiz, R. (2006). La guerrilla mutante. En F. Leal [Ed.]. *En la encrucijada Colombia en el siglo XXI* (pp. 323-356). Bogotá, Colombia: Norma.
- Pécaut, D. (2003). *Violencia y política en Colombia, elementos de reflexión*. Medellín, Colombia: Hombre Nuevo.
- Pizarro, E. (1989). La guerrilla y el proceso de paz. En G. Gallón [Ed.]. *Entre movimientos y caudillos* (pp. 247-260). Bogotá, Colombia: CINEP / CEREC.
- Pizarro, E. (1990). La insurgencia armada: raíces y perspectivas. En F. Leal y L. Zamosc [Eds.]. *Al filo del caos* (pp. 425-430). Bogotá, Tercer Mundo/ IEPRI, Universidad Nacional.
- Romero, M. (2007). Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir. En F. Leal [Ed.]. *En la encrucijada Colombia en el siglo XXI* (pp. 357-386). Bogotá, Colombia: Norma.

CURRÍCULO

Carlos Alberto Osorio Calvo. Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá con tesis titulada Superación de la sobre represión: análisis de las tesis de Herbert Marcuse. Magister en sociología de la universidad del valle con tesis titulada Movimiento indígena y guerrilla en Colombia: tensiones en torno a la autonomía y la democracia, 1972-2012. Docente en las áreas de filosofía y humanidades y en sociología. Investigador sobre movimientos sociales. Conflicto y violencia, con contribuciones académicas y sociales en el campo de la paz, los derechos humanos y la organización social y comunitaria.